

**D.M Quito, 14 de mayo de 2009**

**DICTAMEN N.º 0006-09-DTI-CC**

**CASO: 0004-09-TI**

**Juez Sustanciador: Dr. Diego Pazmiño Holguín**

**I. ANTECEDENTES**

El señor economista Rafael Correa, Presidente Constitucional de la República, remite a la Corte Constitucional la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, fundamental para prevenir desapariciones forzadas, tipificando la conducta como delito, y para establecer mecanismos para que las víctimas tengan derecho a una reparación.

Dicho documento fue remitido por la Cancillería a la Presidencia de la República en memorando N.º CAD-M-09317 del 20 de marzo del 2009, por ser un tratado internacional sujeto a ratificación.

Por lo dispuesto en el Art. 419, numeral 3 de la Constitución de la República, la ratificación de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional, cuando contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Art. 438 de la Carta Magna, solicita se expida el dictamen correspondiente.

**II. TEXTO ÍNTEGRO DEL ACUERDO QUE CONSTITUYE MATERIA  
AXIAL DEL PRESENTE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD**

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE  
TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES  
FORZADAS**

**Preámbulo**

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales,

Teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los otros instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos, del derecho humanitario y del derecho penal internacional,

Recordando también la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, del 18 de diciembre de 1992,

Conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad,

Decididos a prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada,

Teniendo presente el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación,

Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin,

Han convenido en los siguientes artículos:

## **PRIMERA PARTE**

### *Artículo 1*

1. Nadie será sometido a una desaparición forzada.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o

cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.

#### *Artículo 2*

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

#### *Artículo 3*

Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.

#### *Artículo 4*

Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

#### *Artículo 5*

La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable.

#### *Artículo 6*

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable, por lo menos:
  - a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma;
  - b) Al superior que:

- i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo, o se proponían cometer, un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente;
  - ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y
  - iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento;
- c) El inciso *b supra* se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar.
2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada.

#### *Artículo 7*

1. Los Estados Partes considerarán el delito de desaparición forzada punible con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad.
2. Los Estados Partes podrán establecer:
  - a) Circunstancias atenuantes, en particular, para los que habiendo sido partícipes en la comisión de una desaparición forzada, hayan contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida o hayan permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar a los responsables de una desaparición forzada;
  - b) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, especialmente en caso de deceso de la persona desaparecida, o para quienes sean culpables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidades u otras personas particularmente vulnerables.

### *Artículo 8*

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5:

1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:
  - a) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito;
  - b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito.
2. El Estado Parte garantizará a las víctimas de desaparición forzada el derecho a un recurso eficaz durante el plazo de prescripción.

### *Artículo 9*

1. Cada Estado Parte dispondrá de lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los siguientes casos:
  - a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;
  - b) Cuando el presunto autor del delito sea nacional de ese Estado;
  - c) Cuando la persona desaparecida sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
2. Cada Estado Parte tomará, asimismo, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido.
3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal adicional ejercida de conformidad con las leyes nacionales.

### *Artículo 10*

1. Cada Estado Parte en cuyo territorio se encuentre una persona de la que se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas legales necesarias para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de asegurar su presencia en el marco de un procedimiento penal, de entrega o de extradición.
2. El Estado parte que haya adoptado las medidas contempladas en el párrafo 1 del presente artículo procederá inmediatamente a una investigación preliminar o averiguación de los hechos. Informará a los Estados Partes a los que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 9, sobre las medidas adoptadas en aplicación del párrafo 1 del presente artículo, especialmente sobre la detención y las circunstancias que la justifican, y sobre las conclusiones de su investigación preliminar o averiguación, indicándoles si tiene intención de ejercer su jurisdicción.
3. La persona detenida, de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, podrá comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.

### *Artículo 11*

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si no procede a su extradición, o a su entrega a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o a su transferencia a una instancia penal internacional cuya jurisdicción haya reconocido, someterá el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal.
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito común de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 9, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será, en modo alguno, menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 9.

3. Toda persona investigada en relación con un delito de desaparición forzada, recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento. Toda persona sometida a juicio por un delito de desaparición forzada, gozará de las garantías judiciales ante una corte o un tribunal de justicia competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

### *Artículo 12*

1. Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Se tomarán medidas adecuadas, en su caso, para asegurar la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como de quienes participen en la investigación, contra todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada.
2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.
3. Los Estados Partes velarán para que las autoridades mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo:
  - a) Dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes para la misma;
  - b) Tengan acceso, previa autorización judicial si fuera necesario, emitida a la mayor brevedad posible, a cualquier lugar de detención y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse la persona desaparecida.
4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En particular, deberán garantizar que las personas de las que se supone que han cometido un delito de desaparición forzada, no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados

de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación.

*Artículo 13*

1. A efectos de extradición entre Estados Partes, el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este único motivo.
2. El delito de desaparición forzada estará comprendido de pleno derecho entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes antes de la entrada en vigor de la presente Convención.
3. Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada entre los delitos susceptibles de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí con posterioridad.
4. Cada Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición en lo relativo al delito de desaparición forzada.
5. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado, reconocerán el delito de desaparición forzada como susceptible de extradición entre ellos mismos.
6. La extradición estará subordinada, en todos los casos, a las condiciones previstas por el derecho del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidas, en particular, las condiciones relativas a la pena mínima exigida para la extradición y a los motivos por los cuales el Estado Parte requerido puede rechazar la extradición, o sujetarla a determinadas condiciones.

7. Ninguna disposición de la presente Convención debe interpretarse en el sentido de obligar al Estado Parte requerido a que conceda la extradición si éste tiene razones serias para creer que la solicitud ha sido presentada con el fin de procesar o sancionar a una persona por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social, o si, al aceptar la solicitud, se causara un daño a esta persona por cualquiera de estas razones.

#### *Artículo 14*

1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio judicial posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a un delito de desaparición forzada, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
2. El auxilio judicial estará subordinado a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de cooperación judicial aplicables, incluidos, en particular, los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar dicho auxilio o someterlo a determinadas condiciones.

#### *Artículo 15*

Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio posible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas; y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos.

#### *Artículo 16*

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda la existencia en el Estado de que se trate, de un cuadro de violaciones sistemáticas graves, flagrantes o masivas de los derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario.

*Artículo 17*

1. Nadie será detenido en secreto.
2. Sin perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado Parte en materia de privación de libertad, cada Estado Parte, en su legislación:
  - a) Establecerá las condiciones bajo las cuales pueden impartirse las órdenes de privación de libertad;
  - b) Determinará las autoridades que estén facultadas para ordenar privaciones de libertad;
  - c) Garantizará que toda persona privada de libertad sea mantenida únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados.
  - d) Garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, con la sola reserva de las condiciones establecidas por la ley, y en el caso de un extranjero, a comunicarse con sus autoridades consulares, de conformidad con el derecho internacional aplicable;
  - e) Garantizará el acceso de toda autoridad e institución competentes y facultadas por la ley y a los lugares de privación de libertad, si es necesario, con la autorización previa de una autoridad judicial;
  - f) Garantizará, en cualquier circunstancia, a toda persona privada de libertad y, en caso de sospecha de desaparición forzada, por encontrarse la persona privada de libertad en la incapacidad de ejercer este derecho, a toda persona con un interés legítimo, por ejemplo, los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para que éste determine, sin demora, la legalidad de la privación de libertad y ordene la liberación si dicha privación de libertad fuera ilegal.
3. Cada Estado Parte asegurará el establecimiento y el mantenimiento de uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas privadas de libertad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial o de toda otra autoridad o institución competente de acuerdo con la legislación nacional o cualquier instrumento jurídico internacional relevante del que el Estado sea Parte. Esa información contendrá al menos:
  - a) La identificación de la persona privada de libertad;

- b) El día, la hora y el lugar donde la persona fue privada de libertad y la autoridad que procedió a la privación de libertad;
- c) La autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos de ésta;
- d) La autoridad que controla la privación de libertad;
- e) El lugar de privación de libertad, el día y la hora de admisión en el mismo y la autoridad responsable de dicho lugar;
- f) Los elementos relativos a la integridad física de la persona privada de libertad;
- g) En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos de la persona fallecida;
- h) El día y la hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la autoridad encargada del traslado.

#### *Artículo 18*

1. Sin perjuicio de los artículos 19 y 20, cada Estado Parte garantizará a toda persona con un interés legítimo en esa información, por ejemplo, los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el acceso, como mínimo, a las informaciones siguientes:
  - a) La autoridad que decidió la privación de libertad;
  - b) La fecha, la hora y el lugar en que la persona fue privada de libertad y admitida en un lugar de privación de libertad;
  - c) La autoridad que controla la privación de libertad;
  - d) El lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y, en caso de traslado hacia otro lugar de privación de libertad, el destino y la autoridad responsable del traslado;
  - e) La fecha, la hora y el lugar de la liberación;
  - f) Los elementos relativos al estado de salud de la persona privada de libertad;
  - g) En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos.
2. Se adoptarán, llegado el caso, medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas a las que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, así como de quienes participen en la investigación, contra cualquier maltrato, intimidación o sanción en razón de la búsqueda de informaciones sobre una persona privada de libertad.

*Artículo 19*

1. Las informaciones personales, inclusive los datos médicos o genéticos que se recaben y/o transmitan en el marco de la búsqueda de una persona desaparecida, no pueden ser utilizadas o reveladas con fines distintos de dicha búsqueda. Ello es sin perjuicio de la utilización de esas informaciones en procedimientos penales relativos a un delito de desaparición forzada, o en ejercicio del derecho a obtener reparación.
2. La recopilación, el tratamiento, el uso y la conservación de informaciones personales, inclusive datos médicos o genéticos, no debe infringir o tener el efecto de infringir los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de la persona.

*Artículo 20*

1. Únicamente en el caso en que una persona esté bajo protección de la ley y la privación de libertad se halle bajo control judicial, el derecho a las informaciones previstas en el artículo 18 podrá limitarse, sólo a título excepcional, cuando sea estrictamente necesario en virtud de restricciones previstas por la ley, y si la transmisión de información perjudicase la intimidad o la seguridad de la persona o el curso de una investigación criminal, o por otros motivos equivalentes previstos por la ley, y de conformidad con el derecho internacional aplicable y con los objetivos de la presente Convención. En ningún caso se admitirán limitaciones al derecho a las informaciones previstas en el artículo 18 que puedan constituir conductas definitivas en el artículo 2 o violaciones del párrafo 1 del artículo 17.
2. Sin perjuicio del examen de la legalidad de una privación de libertad, el Estado Parte garantizará a las personas a las que se refiere el párrafo 1 del artículo 18, el derecho a un recurso judicial rápido y efectivo para obtener, sin demora, las informaciones previstas en esa disposición. Ese derecho a un recurso no podrá ser suspendido o limitado bajo ninguna circunstancia.

*Artículo 21*

Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la liberación de una persona se efectúe con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad. Los Estados Partes adoptarán,

asimismo, las medidas necesarias para garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de sus derechos a las personas en el momento en que sean liberadas, sin perjuicio de las obligaciones a las que puedan estar sujetas en virtud de la legislación nacional.

### *Artículo 22*

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6, cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar las siguientes prácticas:

- a) Las dilaciones o la obstrucción de los recursos previstos en el inciso *f* del párrafo 2 del artículo 17 y el párrafo 2 del artículo 20;
- b) El incumplimiento de la obligación de registrar toda privación de libertad, así como el registro de información cuya inexactitud, el agente encargado del registro oficial o los expedientes oficiales, conocía o hubiera debido conocer;
- c) La negativa a proporcionar información sobre una privación de libertad o el suministro de información inexacta, cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley para proporcionar dicha información.

### *Artículo 23*

1. Cada Estado Parte velará por que la formación del personal militar o encargado de la aplicación de la ley, del personal médico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad, incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes de la presente Convención, a fin de:
  - a) Prevenir la participación de esos agentes en desapariciones forzadas;
  - b) Resaltar la importancia de la prevención y de las investigaciones en materia de desapariciones forzadas;
  - c) Velar por que se reconozca la urgencia de la resolución de los casos de desaparición forzada.
2. Cada Estado Parte prohibirá las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas. Cada Estado Parte garantizará que la persona que rehúse obedecer a una orden de esta naturaleza no sea sancionada.

3. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que, cuando las personas a las que se refiere el párrafo 1 del presente artículo tengan razones para creer que se ha producido o está a punto de producirse una desaparición forzada, informen a sus superiores y, cuando sea necesario, a las autoridades u órganos de control o de revisión competentes.

#### *Artículo 24*

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” a la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.
2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas al respecto.
3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.
4. Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.
5. El derecho a la reparación, al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo, comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como:
  - a) La restitución;
  - b) La readaptación;
  - c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación;
  - d) Las garantías de no repetición.
6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus

allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

7. Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas.

### *Artículo 25*

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:
  - a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;
  - b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso *a supra*.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso *a* del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.
3. Los estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización de los niños a los que hace referencia el inciso *a* del párrafo 1 del presente artículo.
4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el inciso *a* del párrafo 1 del presente artículo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, deberán existir en los Estados Partes que reconocen el sistema de adopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación o guarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción o colocación o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada.

5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez.

## **SEGUNDA PARTE**

### *Artículo 26*

1. Para la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, se constituirá un Comité contra la Desaparición Forzada (denominado en lo sucesivo “el Comité”) integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Se tendrá en cuenta el interés que representa la participación en los trabajos del Comité de personas que tengan experiencia jurídica pertinente y de una representación equilibrada de los géneros.
2. La elección se efectuará en votación secreta de una lista de candidatos designados por los Estados Partes entre sus propios nacionales, en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas a este efecto por el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General preparará una lista en orden alfabético de todos los candidatos designados de este modo, indicando, por cada uno de ellos, el Estado Parte que lo ha presentado. Esta lista será comunicada a todos los Estados Partes.

4. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser reelegidos una vez. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión, a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo, designará por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
5. Si un miembro del Comité muere o renuncia, o por cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su candidatura propondrá, teniendo en cuenta los criterios previstos en el párrafo 1 del presente artículo, a otro candidato, entre sus propios nacionales, para que desempeñe sus funciones durante el período de mandato restante, bajo reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a menos que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a partir del momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.
6. El Comité establecerá su reglamento interno.
7. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los medios materiales necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité.
8. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades reconocidas a los expertos en misión para las Naciones Unidas, conforme a lo establecido en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
9. Los Estados Partes se comprometen a cooperar con el Comité y a asistir a sus miembros en el ejercicio de su mandato, en el marco de las funciones del Comité aceptadas por dichos Estados Partes.

### *Artículo 27*

Una Conferencia de los Estados Partes se reunirá no antes de cuatro años y no más tarde de seis años, después de la entrada en vigor de la presente Convención, para evaluar el funcionamiento del Comité y decidir, según las modalidades previstas en el párrafo 2 del artículo 44, si es apropiado confiar a

otra instancia, sin excluir ninguna posibilidad, con las atribuciones previstas en los artículos 28 a 36, la supervisión de la aplicación de la presente Convención.

#### *Artículo 28*

1. En el marco de las competencias que le confiere la presente Convención, el Comité cooperará con todos los órganos, oficinas y organismos convencionales creados en virtud de los instrumentos internacionales, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, las organizaciones o instituciones regionales intergubernamentales apropiadas, así como todas las instituciones, organismos y oficinas nacionales pertinentes que obren para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas.
2. En el marco de sus funciones, el Comité consultará con otros comités convencionales creados por los instrumentos de derechos humanos pertinentes, en particular el Comité de Derechos Humanos establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con miras a asegurar la coherencia de sus observaciones y recomendaciones respectivas.

#### *Artículo 29*

1. Cada Estado Parte presentará al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe relativo a las medidas que hayan adoptado para cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.
3. Cada informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios, observaciones o recomendaciones que considere apropiados. El Estado Parte interesado será informado de dichos comentarios, observaciones o recomendaciones, a los que podrá responder por iniciativa propia o a solicitud del Comité.
4. El Comité podrá también pedir a los Estados Partes informaciones complementarias sobre la aplicación de la presente Convención.

*Artículo 30*

1. El Comité podrá examinar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.
2. Si el Comité considera que la petición de actuar de manera urgente presentada en virtud del párrafo 1 del presente artículo:
  - a) No carece manifiestamente de fundamento;
  - b) No es un abuso del derecho a presentar tales peticiones;
  - c) Se ha presentado previamente y en la forma debida a los órganos competentes del Estado Parte interesado, tales como las autoridades encargadas de efectuar las investigaciones, cuando tal posibilidad existe;
  - d) No es incompatible con las disposiciones de esta Convención; y
  - e) No está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza;

Solicitará al Estado Parte interesado que le proporcione información sobre la situación de dicha persona en el plazo que el Comité determine.

3. Habida cuenta de la información proporcionada por el Estado Parte interesado de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, el Comité podrá transmitir sus recomendaciones al Estado Parte e incluir una petición de que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidas cautelares, para localizar y proteger a la persona, de conformidad con la presente Convención, y podrá solicitar que informe al Comité, en el plazo que éste determine, sobre las medidas que tome, teniendo en cuenta la urgencia de la situación. El Comité informará a la persona que presentó la petición de acción urgente sobre sus recomendaciones y sobre las informaciones transmitidas por el Estado Parte cuando éstas estén disponibles.
4. El Comité proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido esclarecida. El Comité mantendrá informado al autor de la petición.

*Artículo 31*

1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
2. El Comité declarará inadmisibles cualquier comunicación si:
  - a) Es anónima;
  - b) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible con las disposiciones de la presente Convención;
  - c) La misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza; o si
  - d) Los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados. Esta regla no se aplica si los procedimientos de recurso exceden plazos razonables.
3. Si el Comité considera que la comunicación responde a las condiciones establecidas en el párrafo del presente artículo, la transmitirá al Estado Parte interesado y le solicitará que le proporcione, en un plazo que habrá de fijar el Comité, sus observaciones y comentarios.
4. En cualquier momento tras haber sido recibida una comunicación y antes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud de que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. El ejercicio de esta facultad por el Comité no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
5. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo. El Comité informará al autor de la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Parte de que se trate. Cuando el Comité decida poner término al

procedimiento, comunicará su dictamen al Estado Parte y al autor de la comunicación.

### *Artículo 32*

Cada Estado Parte, en la presente Convención, podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración, ni una comunicación presentada por un Estado Parte que no haya hecho dicha declaración.

### *Artículo 33*

1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones de la presente Convención por un Estado Parte podrá, después de consultar con dicho Estado, solicitar a uno o varios de sus miembros que efectúen una visita al mismo y le informen al respecto sin demora.
2. El Comité informará, por escrito, al Estado Parte interesado, de su intención de efectuar una visita, señalando la composición de la delegación y el objeto de la visita. El Estado Parte dará su respuesta en un plazo razonable.
3. Ante una solicitud motivada del Estado Parte, el Comité podrá decidir postergar o cancelar la visita.
4. Si el Estado Parte otorga su acuerdo a la visita, el Comité y el Estado Parte de que se trate, cooperarán para definir las modalidades de aquella y el Estado Parte ofrecerá todas las facilidades necesarias para su desarrollo.
5. El Comité comunicará al Estado Parte de que se trate, sus observaciones y recomendaciones como resultado de la visita.

### *Artículo 34*

Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras

haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.

*Artículo 35*

1. La competencia del Comité sólo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.
2. Si un Estado pasa a ser Parte de la presente Convención después de su entrada en vigor, sus obligaciones respecto al Comité sólo se extenderán a las desapariciones forzadas que hayan comenzado con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención para dicho Estado.

*Artículo 36*

1. El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente Convención, a los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. La publicación en el informe anual de una observación relativa a un Estado Parte debe ser previamente anunciada a dicho Estado, el cual dispondrá de un plazo razonable de respuesta y podrá solicitar la publicación de sus comentarios u observaciones en el informe.

**TERCERA PARTE**

*Artículo 37*

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que puedan estar recogidas en:

- a) El derecho de un Estado Parte; o
- b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

*Artículo 38*

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
2. La presente Convención estará sujeta a ratificación por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

*Artículo 39*

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

*Artículo 40*

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente Convención o se hayan adherido a ella:

- a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas con arreglo al artículo 38;
- b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo 39.

*Artículo 41*

Las disposiciones de la presente Convención serán aplicables a todas las partes constitutivas de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

*Artículo 42*

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención, que no se

solucione mediante negociación o a través de los procedimientos previstos expresamente en la presente Convención, se someterá a arbitraje a petición de uno de los Estados implicados. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Cada Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa declaración.
3. Cada Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

#### *Artículo 43*

La presente Convención se entiende sin perjuicio de las disposiciones del derecho internacional humanitario, incluidas las obligaciones que incumben a las Altas Partes contratantes de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos Adicionales del 08 de junio de 1977, o de la posibilidad que tiene cada Estado Parte de autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja, a visitar los lugares de detención en los casos no previstos por el derecho internacional humanitario.

#### *Artículo 44*

1. Cada Estado Parte, en la presente Convención, podrá proponer enmiendas o depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en la presente Convención, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la comunicación, al menos un tercio de los Estados Partes se declarara a favor de tal convocatoria, el Secretario General organizará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

2. Toda enmienda adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su aceptación.
3. Una enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en la presente Convención, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
4. Cuando entren en vigor, las enmiendas serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

#### *Artículo 45*

1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados mencionados en el artículo 38.

### **III. DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS QUE SE RESOLVERÁN.**

Para proceder al control previo de constitucionalidad de la *Convención Internacional para la protección de personas contra las desapariciones forzadas*, el Pleno de la Corte Constitucional para el Período de Transición, considera necesario sistematizar los argumentos planteados en el caso, a partir de la solución de los siguientes problemas jurídicos:

- ¿Qué tipo de control constitucional procede respecto a Tratados Internacionales?
- ¿Cuáles son las consecuencias o efectos de los principios *Pacta Sunt Servanda* y *Bona Fide*, previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados?
- ¿En qué casos constituye un requisito previo *sine qua non* la aprobación de un Tratado Internacional por parte de la Asamblea Nacional?

- ¿Qué debe entenderse por el delito de *desaparición forzada de personas*?  
¿Cuáles son sus efectos?
- ¿En qué consiste la obligación de hacer o de cumplimiento que genera la ratificación de un Tratado Internacional?
- ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones emanadas de la ratificación de un Tratado Internacional?
- Si el contenido material de un tratado internacional está compuesto por normas téticas, ¿sería esto suficiente para que un juez o autoridad nacional lo aplique de manera inmediata en ausencia de un tipo penal en el ordenamiento jurídico interno?
- ¿Cuáles son los efectos que genera el principio de reserva de ley en materia penal previsto en la Constitución de la República? ¿Es posible establecer o implementar un tipo penal en el ordenamiento jurídico a partir de un instrumento internacional?
- ¿Qué debe entenderse y como debe cumplir el Estado con la obligación de *adecuar la normativa interna para el cumplimiento de un tratado*?

#### IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

##### Competencia

La Corte Constitucional es competente para resolver, mediante dictamen vinculante, sobre la constitucionalidad del instrumento internacional “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, en virtud de lo preceptuado en el numeral 1 del Art. 438 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala:

***“La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley:***

***1. Tratados internacionales previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional...”***

La Primera Sala de la Corte Constitucional para el Período de Transición avocó conocimiento del mismo el 20 de abril del 2009, de conformidad con lo previsto en el Art. 27 del Régimen de Transición incluido en la Constitución de la República del Ecuador en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008 y la resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 451 del 22 de octubre del 2008.

### **Fundamentos jurídicos para la procedencia del control previo y vinculante de constitucionalidad de tratados e instrumentos internacionales**

De conformidad con lo prescrito en el artículo 424 de la Constitución de la República, *La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.*

Partiendo de esa premisa, resulta evidente que la aprobación y ratificación de un Tratado o Instrumento Internacional, requiere de un minucioso control de constitucionalidad integral, que determine su compatibilidad con la Carta Fundamental. *Pero ¿qué tipo de control constitucional rige respecto a Tratados Internacionales?* Para dar respuesta a dicha cuestión, resulta imprescindible remitirse a la Convención de Viena de 1939 (de la cual el Ecuador es parte) y concretamente a los artículos 26 y 27 que en lo pertinente disponen: (...) ***Pacta Sunt Servanda y Bona Fide*** todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe... Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación al incumplimiento de un tratado.<sup>1</sup> A partir de ello, se colige que una vez ratificado un tratado internacional, el Estado pierde la capacidad interna de juzgamiento, haciendo tránsito éste al campo del derecho internacional y a las demás reglas que la rigen. Así, la única forma de desprenderse de las obligaciones emanadas de la ratificación de un instrumento internacional es *el procedimiento de denuncia*, previsto en la misma Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Al amparo de lo señalado, se justifica la exclusión de un control constitucional a posteriori (acción pública de inconstitucionalidad) respecto a Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador.

Precisamente por ello, la Constitución de la República contempla una serie de procedimientos seguros y eficaces encaminados al control *previo* de constitucionalidad sobre aquellos Tratados Internacionales que el Ecuador pretenda ratificar e incorporar a su ordenamiento jurídico. Así, de conformidad con lo prescrito en el artículo 438 numeral 1 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional resulta ser el órgano competente para emitir dictámenes vinculantes de constitucionalidad en el caso de Tratados Internacionales, previo a su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, y a su posterior ratificación en manos del Ejecutivo. (Artículo 418 de la Constitución de la República).

---

<sup>1</sup> Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Artículos 26 y 27

### **Sobre la Constitucionalidad de la “Convención” suscrita entre la República del Ecuador y la República Argentina para el cumplimiento de las condenas penales**

Tal como se mencionó previamente, el dictamen que emita esta Corte Constitucional respecto a la “Convención” en cuestión, constituye un requerimiento previo *sine qua non* a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Es preciso puntualizar, que el término ratificación no es sinónimo de aprobación. En efecto, la diferencia entre ambos, es recogida por la doctrina constitucional, misma que establece cuál es el itinerario normal que debe seguir un Tratado para pasar a formar parte del ordenamiento jurídico interno.<sup>2</sup> Así, al tenor de la Carta Fundamental, corresponde a la Presidenta o Presidente de la República la ratificación de Tratados y otros Instrumentos Internacionales (Artículo 418) de modo directo, o, en su defecto, mediante referéndum solicitado por iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República (Artículo 420) de modo indirecto. La Asamblea Nacional, por su parte, aprueba el Texto del Tratado -no lo ratifica- siempre y cuando se cumplan los presupuestos normativos consagrados en el Artículo 419, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la Constitución de la República. En la especie, *la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, se circunscribe en el numeral 3 del Artículo 419 de la Constitución de la República, (...) *La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.* Así, la Asamblea Nacional requiere de dictamen favorable de constitucionalidad previo a la aprobación y posterior ratificación de la *Convención* en mención. Sobre la base de lo expuesto, es procedente pasar al análisis de constitucionalidad integral, *formal y material de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, que determinará su compatibilidad respecto a la Constitución de la República.

Previo a iniciar con el respectivo control previo de constitucionalidad, el Pleno de la Corte Constitucional para el Período de Transición señala lo siguiente:

Con fecha 18 de marzo del 2008, el extinto Tribunal Constitucional del Ecuador, en referencia a la Convención materia de análisis, emitió Dictamen

---

<sup>2</sup> Según el argentino Germán Bidart Campos, un Tratado transita por cuatro etapas: a) negociación, a cargo del Ejecutivo; firma, a cargo del Ejecutivo; c) aprobación, a cargo del Congreso; y ratificación, a cargo del Ejecutivo. Véase, Bidart campos, Germán, *Compendio de Derecho Constitucional*, Buenos Aires, Ediar, 2008, pag. 223.

Favorable N.º 0008- 2007- CI, “*en razón de que su normativa guardaba plena armonía con los mandatos consignados en la Constitución Política de 1998, e hizo conocer a la Asamblea Constituyente del Dictamen para que procediera a la aprobación de la mencionada Convención.*”

Debido a que desde el 20 de octubre del 2008 está vigente la nueva Constitución de la República del Ecuador, la cual en su Disposición Derogatoria extingue la Constitución Política de 1998, corresponde entonces, homologar el control de constitucionalidad realizado por el antiguo Tribunal Constitucional a la luz de la Carta Fundamental vigente.

### **Control Formal**

En la especie, y al tenor de lo expuesto previamente, *la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, se circunscribe en la situación prevista en el numeral 3 del Artículo 419 de la Constitución de la República, por lo que, previo a su ratificación por parte del Presidente de la República, se torna necesaria su aprobación en el seno de la Comisión Legislativa y Fiscalización, que temporalmente se encuentra ejerciendo las funciones de la Asamblea Nacional. Bajo esos parámetros, el Presidente Constitucional de la República remitió *la Convención* en cuestión a esta Corte Constitucional para el Período de Transición, a fin de que emita dictamen previo de constitucionalidad en los términos previstos en el Artículo 438 numeral 1 de la Constitución de la República. A partir de lo expuesto, se colige que el proceso de aprobación y ratificación de la *Convención en cuestión*, ha seguido el procedimiento constitucional previsto en los artículos 417, 418, 419.3 y 438 de la Constitución de la República.

### **Control Material**

El Pleno de la Corte Constitucional para el Período de Transición coincide en determinar que el contenido material de la Convención objeto de análisis, guarda relación con los numerales 3 y 4 del artículo 419 de la Constitución de la República. En efecto, la *Convención internacional para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas*, más allá de encontrarse vinculada a una obligación como es el *compromiso de expedir, modificar o derogar una ley*, también guarda relación con una serie de *derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República*. Y es que, el delito de “desaparición forzada”, en los términos definidos por la Convención Interamericana sobre la

desaparición forzada de personas<sup>3</sup>, resulta ser el hecho generador de un doble efecto irradiativo. Al tiempo que genera repercusiones sobre una serie de derechos reconocidos y garantizados en la Constitución de la República, también configura una obligación o compromiso respecto al Estado para sancionar este tipo de violaciones.<sup>4</sup>

En ese contexto, esta Corte ha considerado oportuno esquematizar el presente control material de constitucionalidad bajo los siguientes lineamientos:

- a) Control de Constitucionalidad que determine la compatibilidad de la Convención objeto de análisis con los derechos y garantías reconocidos y garantizados en la Constitución de la República. (Artículo 419 numeral 4);
- b) Las obligaciones que se generan respecto al Estado ecuatoriano, en virtud de su aprobación y posterior ratificación. (Artículo 419 numeral 3).

En ese orden de ideas, resulta trascendental iniciar el presente control material de constitucionalidad, haciendo alusión a lo prescrito en el artículo 429 de la Constitución de la República:

*(...) La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.*

A partir del precepto en mención, resulta claro que cuanto más garantistas sean los contenidos del Tratado Internacional que pretenda ser implementado en el ordenamiento jurídico nacional, más deberá ser considerado válido para el país. Por el contrario, si éstos, de alguna manera, inobservan o restringen derechos

---

<sup>3</sup> Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Artículo II. Proceso de aprobación y ratificación por el Estado ecuatoriano: Fecha de firma: 8 / 02 / 00, fecha de ratificación: 07 / 07 / 06, fecha de depósito 27 / 07 / 06 (...) *La privación de libertad de una o más personas, cualquiera fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.*

<sup>4</sup> Luis Pásara, “El uso de los instrumentos internacionales de DD.HH. en la Administración de Justicia”, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Naciones Unidas, 2008, p. 64. (...) *En este tipo de violaciones está en cuestión, en primer lugar, el derecho a la vida que, obviamente es el primero de los dd.hh. Pero además, el tema también colisiona con dos obligaciones fundamentales del Estado; de una parte, la obligación general de proteger los derechos de quienes habitan en su territorio y, de otra, el deber específico de no atentar contra la vida de esas personas.*

fundamentales, se deberá declarar expresamente de qué manera opera tal incompatibilidad y determinar la imposibilidad de continuar con su trámite aprobatorio.

En el caso sub judice, una vez efectuado un minucioso escrutinio constitucional de la *Convención* materia de análisis, y constatado el control previo de constitucionalidad efectuado por el extinto Tribunal Constitucional en Dictamen N.º 0008 – 2007 – CI, publicado en R.O. N.º 309 del 04 de abril del 2008, considera que existe adecuación con el texto constitucional vigente, pues en lo principal, sus artículos de fondo y objetivos centrales guardan relación directa con el ejercicio pleno de una serie de derechos constitucionales que constaban en la Constitución Política de 1998, y que ahora encuentran asidero y desarrollo en la Constitución de la República vigente. Como se mencionó, el antiguo Tribunal Constitucional del Ecuador efectuó ya un control previo de constitucionalidad respecto a la *Convención* materia de análisis; y, en alusión a las *repercusiones que este genera respecto a los derechos previstos en la Constitución Política de 1998*, señaló:

(...) **TERCERO.-** *las normas que instituyen los deberes fundamentales del Estado Ecuatoriano respecto de los derechos individuales, son recogidos por nuestra Constitución Política, como la establecida en el numeral 2 del artículo 23, que instituye: “artículo 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes... 2. La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral y la aplicación y utilización indebida del material genético humano....*

**CUARTO.-** *Los objetivos señalados en el supradicho Preámbulo de la “Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, son concordantes además con los derechos y garantías consagrados por la Constitución Política de la República del Ecuador, particularmente las derivadas de la seguridad jurídica y el debido proceso consignadas en los numerales 26 y 27 del precitado artículo 23... QUINTO.- El conjunto de normas y principios expresados en la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ya han sido aplicados por el Ecuador, como aquellas normas establecidas en el artículo 1.1 Nadie será sometido a una desaparición forzada. 2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de*

*guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada, son coincidentes con la normatividad constitucional del Estado ecuatoriano consagrada por el artículo 24 numerales 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17.*

Respecto al análisis precedente, esta Corte, en virtud al proceso de homologación que debe seguir al amparo de la Constitución de la República vigente, señala:

Si bien, la Constitución vigente no adopta la denominación tradicional que utilizaba la Constitución de 1998 para referirse a aquellos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos, no deja de reconocerlos y garantizarlos.

*[...] Así es: no se habla de derechos civiles, denominación muy vinculada a la tradición liberal decimonónica, **sino de derechos de libertad y protección**; por otra parte, se prefiere el término “derechos de participación” para subrayar el protagonismo de los distintos sujetos en la toma de decisiones del ámbito político; asimismo, en lugar de hacer referencia a los tradicionalmente debilitados derechos sociales y económicos, se aporta la novedosa denominación de “derechos del buen vivir”, la traducción del sumak kawsay kichwa, que constata la presencia de las aportaciones de las culturas indígenas en la construcción de un proyecto de desarrollo social centrado en una mejora de las condiciones de vida que no se debe medir en términos cuantitativos sino cualitativos.<sup>5</sup>*

Bajo esas circunstancias, esta Corte detecta que los derechos aludidos por parte del antiguo Tribunal Constitucional del Ecuador, en su control material de constitucionalidad, encuentran asidero y mayor desarrollo en la Constitución de la República vigente. Así, los objetivos centrales previstos en el Preámbulo <sup>6</sup> y a

<sup>5</sup> Marco Aparicio Wilhelmi, “Derechos: Enunciación y principios de aplicación”, en *Desafíos Constitucionales, La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva*, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Constitucional del Ecuador, 2008, p.22.

<sup>6</sup> El Preámbulo de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas dispone: *Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados las obligaciones de promover el respeto universal y efectivo a los derechos humanos y libertades fundamentales...Concientes de la extrema gravedad de las desapariciones forzadas, que constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad. Decididos a prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de la desaparición forzada. Teniendo presentes el derecho de*

lo largo de la Convención materia de análisis, guardan plena concordancia y armonía con una serie de derechos de libertad y protección plasmados en los Capítulos VI y VIII de la Constitución de la República. Entre ellos se pueden resaltar algunos:

**[...] DERECHOS DE LIBERTAD:**

*Artículo 66 de la Constitución de la República: Se reconoce y garantizará a las personas*

1. *El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte;*
3. *El derecho a la integridad personal, que incluye:*
  - a) *La integridad física, psíquica, moral y sexual.*
  - b) *Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.*
  - c) *La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.*

**DERECHOS DE PROTECCIÓN**

*Artículo 76: En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:*

1. *Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.*
3. [...] *Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.*
7. e) *Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por*

---

*toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación. Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información a este fin*

*cualquier otra, sin presencia de un abogado particular o un defensor público ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.*

*k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente e imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.*

*Artículo 77: En todo proceso penal en que se haya privado de libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:*

*3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.*

*6. Nadie podrá ser incomunicado.*

*7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: a) Ser informada, de forma previa y detallada en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.*

*Artículo 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.*

Del análisis precedente se desprende que el contenido material previsto en la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, guarda plena compatibilidad con los derechos reconocidos en la Constitución de la República.

Ahora bien, en cuanto a las obligaciones positivas de hacer que la ratificación del presente instrumento internacional irradia sobre el Estado ecuatoriano, en relación a la protección, prevención y **sanción interna (tipificación) del delito de desaparición forzada de personas**, esta Corte considera:

Que el contenido material de la Convención materia de análisis, en lo atinente al caso previsto en el numeral 3 del Artículo 419 de la Constitución de la República<sup>7</sup>, guarda armonía con los derechos y obligaciones previstos en la Constitución de la República, y con una serie de instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Así, por ejemplo, el Artículo II de la *Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas*, en adelante *CONDES* dispone:

- a) *No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;*
- b) *Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;*
- c) *Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y*
- d) *Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesaria para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.* (El subrayado es nuestro).

Como se constata, la CONDES, instrumento internacional que fue ratificado por el Ecuador en el año 2006, ya recogía el compromiso de los Estados partes de “tipificar como delito a la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad, considerándolo como un delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino de la víctima. No obstante a ello, hasta la fecha, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no se prevé el tipo penal atinente a la “desaparición forzada de personas”. A partir de dicha omisión, una serie de obligaciones y derechos relacionados a la desaparición forzada, y que se encuentran previstos en la Constitución, se tornan ineficaces e inejecutables. Entre ellos, se destacan los siguientes:

*Artículo 76 numeral 14 de la Constitución de la República: [...] Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.*

<sup>7</sup> Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Artículo 4: Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en la legislación penal.

*Artículo 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, **desaparición forzada de las personas** o crímenes de agresión a un Estado, serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.*

*Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios.- 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, **estarán obligados a reparar las violaciones** a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido... El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.*

A partir de los mandatos constitucionales precedentes, surgen varias interrogantes:

En relación al artículo 80 de la Constitución de la República, ¿cómo se pretende que las acciones y penas relacionadas a desaparición forzada de personas sea imprescriptible si no existe un tipo penal?

Segundo, ¿cómo podría concederse una reparación integral tan necesaria para este tipo de delito, y ejercerse el derecho de repetición si la legislación interna no contempla un tipo penal referente que sancione la comisión del mismo?

Si bien es cierto que el Artículo 426 de la Constitución prevé expresamente que *las juezas o jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos*, no es menos cierto que el numeral 2 del Artículo 132 de la misma Carta Fundamental, en alusión al

principio de reserva de ley en materia penal, dispone: (...) *Se requerirá de ley en los siguientes casos: 2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.* A partir de ello, es evidente que la implementación de un tipo penal tan necesario como la desaparición forzada, requiere de ley, o en su defecto, de una reforma en el Código Penal con el fin de cumplir con las obligaciones emanadas de instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, y con los principios y reglas constitucionales previstos en la Carta Fundamental. Sólo a partir de la implementación del tipo penal en cuestión, podrá consolidarse el ejercicio pleno de una serie de derechos humanos previstos en la Constitución y en instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es parte. No sólo que con su implementación se cumplirá con prevenir, sancionar y erradicar aquellos delitos de desaparición forzada, sino que incluso se conseguirá uno de los fines esenciales que persigue el Estado Constitucional de Derechos y el garantismo, esto es, la reparación integral (que abarque medidas positivas y negativas no meramente pecuniarias) de las consecuencias que genera la comisión de un delito tan atroz como es la desaparición forzada.

Resulta importante señalar que el Ecuador es parte de una Convención Interamericana que regula el tema tratado en la especie, y tanto la CONDES en su artículo 1 como instrumentos generales sobre derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contemplan la obligación internacional del Estado ecuatoriano, de adecuar su ordenamiento jurídico interno a las disposiciones de estos instrumentos. Por tanto, la Asamblea Nacional debió expedir la ley que tipifique el delito de desaparición forzada, o en su defecto, elaborar las reformas necesarias al Código Penal para implementarlo. Esta obligación resulta ineludible y resulta ser el eje central de la *Convención* que se pretende ratificar. Es preciso recordar que la falta de cumplimiento inmediato de esta obligación por parte de la Asamblea Nacional, podría acarrear la responsabilidad internacional del Estado bajo los mismos parámetros, en virtud de los cuales, en el pasado ya lo ha hecho la Corte Interamericana respecto a normas del Sistema Interamericano de derechos humanos.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “122. La Corte ha interpretado que la adecuación de la normativa interna a los parámetros establecidos en la Convención, implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio; y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. La primera vertiente se satisface con la reforma, la derogación, o la anulación, de las normas o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda. La segunda, obliga al Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos y, por eso, debe adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.”

Bajo esas consideraciones, el Pleno de la Corte Constitucional para el Período de Transición a partir del presente control previo de constitucionalidad, no sólo que determina la compatibilidad formal y material del contenido de la *Convención* respecto a la Constitución de la República, sino que incluso, *conmina* al Estado ecuatoriano, y en concreto a la Asamblea Nacional, a cumplir con las obligaciones adquiridas por la ratificación de instrumentos o tratados internacionales. Así, en el caso sub judice, esta Corte considera imprescindible la implementación del tipo penal correspondiente, que sancione la desaparición forzada de personas, con el único fin de que *la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, no pase a convertirse en un instrumento más ratificado por el Estado ecuatoriano, y cuyo cumplimiento quede suspenso en el tiempo.

## V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional para el Período de Transición:

### DICTAMINA:

1. Emitir dictamen favorable de constitucionalidad pleno y, por tanto, declarar que el texto íntegro de la *Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, se adecua íntegramente al texto de la Constitución de la República del Ecuador.
2. Exhortar a la Asamblea Nacional a que en un plazo razonable que no podrá exceder de 365 días, expida una ley que prevenga, regule, sancione y repare las consecuencias de las desapariciones forzadas o, en su defecto, implemente las reformas necesarias en el Código Penal para consagrar en el ordenamiento jurídico el tipo penal señalado. Todo esto con el fin de consolidar el paradigma del Estado Constitucional de derechos, y evitar que el Ecuador incurra en responsabilidad internacional. Esta Corte es consciente de la serie de leyes que debe aprobar en la actualidad la Comisión Legislativa y de Fiscalización, por ello, el plazo señalado para la elaboración y promulgación de la ley o reformas en mención, correrá una vez que se posea la nueva Asamblea Nacional

---

Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 122.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.-

Dr. Patricio Pazmiño Freire  
**PRESIDENTE**

Dr. Arturo Larrea Jijón  
**SECRETARIO GENERAL**

**Razón:** Siento por tal, que el dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos a favor de los doctores Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Diego Pazmiño Holguín, Nina Pacari Vega, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia del doctor Edgar Zárate Zárate en sesión del día jueves catorce de mayo de dos mil nueve.- Lo certifico.

Dr. Arturo Larrea Jijón  
**SECRETARIO GENERAL**